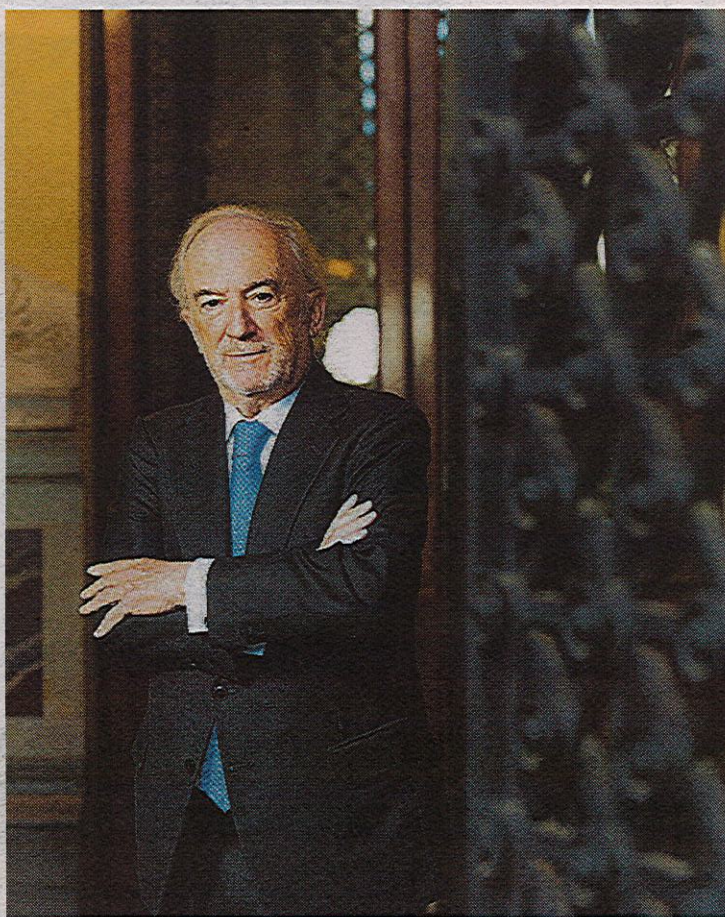




“BUENA PARTE DE LA CLASE POLÍTICA NO DICE LA VERDAD A LOS CIUDADANOS”

Santiago Muñoz Machado. El director de la RAE reivindica en 'Fundamentos del lenguaje claro' que el “derecho a comprender” se sitúa ya junto a los derechos de expresión y de pensamiento

Por **Fernando Palmero** (Madrid)

En su doble condición de director de la RAE y prestigioso jurista (con cátedra de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense), está Santiago Muñoz Machado muy comprometido con la última iniciativa de la RAE: la Primera Convención Panhispánica de Lenguaje Claro, celebrada a finales de mayo en Madrid. Y de sus discursos ampliados de apertura y clausura ha surgido el último libro del prolífico escritor, *Fundamentos del lenguaje claro* (Espasa), donde reivindica el «reconocimiento del derecho a comprender como un derecho subjetivo y exigible de los ciudadanos».

En conversación con este periódico, explica que este movimiento nace de la inquietud «sobre la claridad» (o más bien la falta de ella) «del lenguaje que se emplea con los justiciables». Históricamente, explica, «la Justicia ha tenido fama de oscura, el legislador de más oscuro todavía, y los juristas, de escudarse en la oscuridad para engañar».

«Y es una mala fama merecida, pero que no atañe únicamente a los juristas. El lenguaje no inteligible por los ciudadanos es algo que preocupa en el sector del consumo, de la medicina, de la farmacia, de los bancos, de los seguros y, en general, de todas las empresas privadas que prestan servicios de interés general a los ciudadanos».

Este movimiento, continúa, «trata de convencer a los poderes públicos de que cuando se dirijan a los ciudadanos lo hagan en un lenguaje inteligible. Y esto se está configurando como una obligación de los poderosos, por un lado, y por otro, como un derecho de los ciudadanos exigible. Siempre hemos dicho los juristas que los primeros derechos son los de libertad de pensamiento y libertad de expresión. Ahora, junto a ellos, se sitúa el derecho a comprender».

Uno de los grandes retos viene sin duda de las nuevas tecnologías, y en especial de la inteligencia artificial, ya que «a las máquinas las entrenan con bases de datos descomunales que están en inglés», razón por la cual la Academia está ya trabajando para

«formar un gran banco de datos en español». Pero el principal problema al que se enfrenta la RAE es el auge de los lenguajes inclusivos y políticamente correctos, que fragmentan *de facto* la «regulación unitaria del buen español». Mucho más cuando ese tipo de lenguajes vienen impuestos por el poder político, en forma de regulaciones autonómicas o municipales. «Eso me parece preocupante. La lengua no es cuestión del legislador, es cuestión de los hablantes. Y cualquier interferencia legislativa es un intrusismo inadmisibile en la libertad de expresión de los ciudadanos. Ordenar cómo se tiene que hablar es realmente uno de los peores vicios que puede tener un poder público. Ese mandato sobre lo que es correcto se ha dado en las épocas dictatoriales o en los momentos peores de la vida social, en los regímenes más intolerantes y autoritarios. Y, sin embargo, nos enfrentamos ahora a situaciones en las que eso aparece con frecuencia».

A lo cual contribuyen, sin duda, los políticos, con su empeño en crear una neolengua, al estilo de Orwell, y a confundir en sus discursos. No obstante, aclara Muñoz Machado, «eso no tiene que ver con el lenguaje, sino con que no cuentan la verdad. Es una fase previa. El problema que tenemos ahora con buena parte de la clase política es que no dicen la verdad a los ciudadanos, incluyen en los programas cosas que luego no hacen o mienten respecto de cuáles son sus proyectos. Esto es una cuestión de una enorme gravedad, pero el lenguaje claro no es eso, el lenguaje claro viene después. Lo que usted le cuente a los ciudadanos, tiene que estar expresado en términos asequibles, que no haga falta pedir que se repita, ni leerlo dos veces, que se entienda a la primera».

La intromisión política en el lenguaje es paralela a la que la administración ejerce sobre la historia: «Comparto eso. No hay que reescribir la historia, hay que estudiarla y no valorarla con los criterios éticos, morales o políticos de hoy». Como hace México. «Y Maduro, que también ha hablado recientemente sobre el carácter violento de la conquista. Eso tiene dos respuestas. La primera, que no ha habido ninguna colonización que no haya sido violenta. Pero la española del XVI no tiene ni punto de comparación con las europeas del siglo XIX. La española, aunque haya que reconocer que los conquistadores cometieron algunas barbaridades importantes, ha aportado a América muchas cosas que no han hecho las demás. Pero esta es una polémica en la que hay políticamente posiciones que no van a ser reductibles, no es una cuestión del punto de vista histórico, ni del punto de vista de la verdad, la objetiva. Es político».